



**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN NÚMERO 24801 DE 2019

(28 JUN 2019)

"Por la cual se impone una sanción y se imparten órdenes administrativas"

VERSIÓN PÚBLICA

Radicación 18-11160

**EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, los numerales 4 y 5 del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011 y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que con ocasión a la denuncia promovida por el señor [REDACTED] esta Superintendencia tuvo conocimiento de la presunta violación de las normas de protección de datos personales contenidas en la Ley 1266 de 2008, por parte de la sociedad **AVANTEL S.A.S.** identificada con Nit. 830.016.046-1, por lo que se decidió adelantar averiguaciones preliminares con fundamento en la documentación remitida, y en consideración con los siguientes hechos:

1.1 Manifiesta el señor [REDACTED] que el 11 de diciembre de 2017 la sociedad **AVANTEL S.A.S.** consultó su historial crediticio sin su autorización y afirmó que *"jamás en mi vida he acudido a un punto de venta de Avantel, ni mucho menos he solicitado sus productos o servicios por ningún medio electrónico o físico, ni mucho menos a través de terceros."*

1.2 Que en virtud de lo anterior, solicitó a *"la SIC adelante las investigaciones pertinentes para detener este tipo de violación a la privacidad de mis datos personales y de mi historia de crédito"*.

SEGUNDO: Que mediante comunicación del 15 de febrero de 2018², se ofició a la sociedad **AVANTEL S.A.S.**, para que indicara lo siguiente: (i) informar si consultaron el historial crediticio del señor [REDACTED] en el mes de diciembre de 2017, y de ser así indicar la fecha exacta de la consulta; (ii) informar el motivo de la consulta; (iii) informar si cuenta con la autorización previa, expresa e informada del Titular para ser consultado, de ser así aportar copia de la misma e; (iv) informar si existe relación contractual vigente con el Titular.

TERCERO: Que mediante comunicaciones del 29 de octubre de 2018³, se ofició a los Operadores de información **EXPERIAN COLOMBIA S.A.** y **CIFIN S.A.S.** con el fin de que informaran si la sociedad **AVANTEL S.A.S.** consultó el historial crediticio del Titular en el mes de diciembre de 2017.

CUARTO: Que mediante escrito del 5 de marzo de 2018 y radicado No. 18-11160- -2⁴, la sociedad **AVANTEL S.A.S.** dio contestación al requerimiento señalando: (i) que no cuentan con registros en los cuales se realizara consulta en centrales de riesgo para el señor [REDACTED]; (ii) que las consultas a centrales de riesgo se realizan con autorización del usuario y para validar si cuenta con reportes negativos y consecuentemente poder otorgar el plan solicitado; (iii) que bajo su custodia no se encuentra ninguna documentación relacionada con solicitud de servicios o autorización de consultas a centrales de riesgo del reclamante y; (iv) que entre el reclamante y la sociedad no existe ninguna relación contractual.

¹ Obrante a Folios 1 al 4.

² Obrante a Folio 10.

³ Obrante a Folio 15 y 16.

⁴ Obrante a Folios 11 al 13.

QUINTO: Que mediante escrito del 19 de noviembre de 2018 y radicado No.18-11160- -10⁵ el operador de información **EXPERIAN COLOMBIA S.A.** dio respuesta al anterior requerimiento manifestando que la sociedad **AVANTEL S.A.S** efectuó consulta de la historia de crédito del señor [REDACTED] el día 11 de diciembre de 2017.

SEXTO: Que mediante escrito del 20 de noviembre de 2018 y radicado No.18-11160- -11⁶ el operador de información **CIFIN S.A.S.** dio respuesta al anterior requerimiento manifestando que la sociedad **AVANTEL S.A.S** no consultó el historial crediticio del Titular en el mes de diciembre de 2017.

SÉPTIMO: Que con base en los hechos anotados, a partir de los cuales se advierte la presunta violación de las normas sobre protección de datos personales, y en particular las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 15 de la misma Ley, mediante la Resolución No. 92818 del 24 de diciembre de 2018⁷, esta Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, inició investigación administrativa por medio de la cual se formularon cargos a la sociedad **AVANTEL S.A.S** y al señor [REDACTED] identificado con la C.E. No. 693.961 en su condición de representante legal de **AVANTEL S.A.S**. La mencionada resolución le fue notificada a los investigados a través de aviso el 11 de enero de 2019, conforme la certificación de acuse de recibo certificado, que obra a folio 196 del expediente, para que se pronunciaran sobre los hechos materia de investigación y aportaran las pruebas que pretendieran hacer valer dentro del referido trámite, con el fin de que ejerciera a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

Así mismo, la referida actuación fue comunicada al denunciante.

SÉPTIMO: Que el señor [REDACTED] representante legal de **AVANTEL S.A.S.** mediante comunicación del día 30 de enero de 2019, radicado No. 18-11160- -23 y denominación VPJ-0046-19⁸ presentó escrito de descargos, manifestando lo siguiente:

7.1 Solicitó no tener en cuenta los actos administrativos expedidos dentro del marco de la actuación administrativa No. 16-336625, toda vez que (i) la Resolución No. 27542 del 24 de abril de 2018 dictada dentro de la referida actuación, no se encuentra en firme, puesto que se encuentra pendiente a resolver recurso de apelación y; (ii) los hechos que rodean la mentada actuación, giran en torno a eventos ocurridos en agosto de 2015 y enero de 2016 fecha en la cual el señor [REDACTED] no figuraba como representante legal de la sociedad.

7.2 Indicó que desde que el señor [REDACTED] asumió la representación legal de la empresa, se ha obrado con debida diligencia para organizar las áreas internas de la empresa, por lo que no existen antecedentes que le puedan ser endilgados en cuanto a normas de protección de datos personales; de suerte que, consideró que imponer una sanción al representante legal de la sociedad por antecedentes que no le pueden ser atribuidos, iría en contra de los fines del derecho sancionatorio.

7.3 Recordó que la sociedad realizó todas y cada una de las validaciones de la información, sin embargo, no se encontró en ninguna de las bases de datos información sobre el Titular; igualmente, indicó que se realizaron las validaciones de las áreas internas de la compañía y no se encontraron registros que acrediten siquiera de forma sumaria que la sociedad haya consultado el historial crediticio del Titular.

7.4 Informó que para la fecha de los hechos objeto de la presente investigación, **AVANTEL S.A.S.** mantenía un contrato con la compañía "**KONECTA**" para la colaboración en el desarrollo del objeto social de la sociedad, contrato en virtud del cual la sociedad **KONECTA** contaba con acceso a los perfiles de **AVANTEL S.A.S.** para el ingreso a las bases de datos de los operadores de información; motivo por el cual **AVANTEL S.A.S.** procedió a requerir a la sociedad **KONECTA** información respecto de los hechos materia de la presente actuación administrativa.

⁵ Obrante a Folios 17 a 32.

⁶ Obrante a Folio 33.

⁷ Obrante a Folios 213 al 216.

⁸ Obrante a Folios 190 al 195.

- 7.5 Adujo que la sociedad KONECTA, respondió al requerimiento aduciendo que por la antigüedad de la información no era posible realizar validación alguna, sin embargo, indicaron que no encontraron en sus bases de datos información del Titular. En ese sentido, consideró la investigada que existe duda respecto de quién fue la persona natural o jurídica que realizó la consulta.
- 7.6 Solicitó que fuese aplicado el principio de *in dubio pro disciplinado* o *principio de favorabilidad*, toda vez que no existen pruebas suficientes para endilgar responsabilidad a la sociedad en relación a los hechos objeto de la presente investigación; lo anterior, consideró la investigada, dado que el reporte del Operador Experian Colombia S.A. sólo es un hecho indicativo de que la consulta objeto de investigación se realizó con el usuario de **AVANTEL S.A.S.** más no permite inferir que la comisión de la infracción sea imputable a la sociedad.
- 7.7 Afirmó que la compañía cuenta con una rígida Política de Protección de Datos Personales y que igualmente se han efectuado una serie de capacitaciones, a partir de las cuales se ha resaltado la importancia de contar con la autorización del Titular para el tratamiento.
- 7.8 Indicó que la compañía finalizó la relación comercial con la empresa KONECTA y suscribió contrato con la sociedad TELEPERFORMANCE, a quien se le exigió el cumplimiento de los más altos estándares de calidad respecto de la normatividad relativa a protección de datos personales.
- 7.9 En el mismo sentido, indicó que en virtud del interés de la sociedad sobre el correcto manejo e íntegro cumplimiento de la normatividad, se celebró el día 21 de mayo una reunión con la Dirección de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, en la que se socializó la importancia del manejo y la protección de los datos personales. Finalmente, la investigada manifestó que siempre ha actuado de buena fe en el desarrollo de la presente actuación.
- 7.10 Finalmente, solicitó la investigada que conforme a todo lo anterior, se procediera con el archivo de la presente actuación administrativa.

OCTAVO: Que la sociedad investigada mediante comunicación del día 30 de enero de 2019 y radicado No. 18-11160- -23 y denominación VPJ-0045-19⁹ presentó escrito de descargos, manifestando lo siguiente:

- 8.1 Indicó la investigada que la sociedad procedió a efectuar todas las validaciones internas pertinentes, sin embargo, no se encontró que en las bases de datos de la sociedad hubiese información relacionada con el señor [REDACTED], así como tampoco algún soporte que acreditara de forma siquiera sumaria que **AVANTEL S.A.S.** hubiese consultado la información del Titular contenida en los operadores de información.
- 8.2 Informó que se procedió a solicitar información a la sociedad "KONECTA", la cual mantenía un contrato de colaboración para el desarrollo del objeto social para la fecha de los hechos, en virtud del cual dicha sociedad tenía acceso al perfil de **AVANTEL S.A.S.** para ingresar a las bases de datos de los operadores de información. Sin embargo, manifestó que la sociedad "KONECTA" adujo que, dada la antigüedad de la información no era posible realizar validación alguna y que en sus bases de datos no registraba información del señor [REDACTED]
- 8.3 En virtud de lo anterior, la investigada consideró que existe duda respecto de quién fue la persona natural o jurídica que efectuó la consulta.
- 8.4 Solicitó la investigada le fuera aplicado el principio de favorabilidad administrativa, el cual consideró aplicable a la presente actuación por analogía, teniendo en cuenta que el mismo emana del artículo 29 de la Constitución Política y que a su consideración no existen pruebas suficientes que permitan endilgar responsabilidad a **AVANTEL S.A.S.** respecto de los hechos materia de la presente actuación.

⁹ Obrante a Folios 190 al 195.

- 8.5 Indicó que lo manifestado por el Operador de información **EXPERIAN COLOMBIA S.A.** únicamente permite inferir que la consulta a la información del Titular se efectuó a través del perfil de **AVANTEL S.A.S.**, más no que la comisión de los hechos materia de la presente investigación sea imputable a la sociedad.
- 8.6 Recordó que la sociedad cuenta con una estricta Política de Protección de Datos Personales, a partir de la cual se salvaguardan los derechos de los Titulares y que adicionalmente, ha efectuado varias jornadas de capacitación respecto de la importancia de la autorización para el tratamiento de datos personales y que igualmente, ha venido fortaleciendo su formato de autorización.
- 8.7 Informó la investigada que finalizó vínculos con la sociedad "KONECTA" y que suscribió nuevo contrato con la sociedad "TELEPERFORMANCE", a quien se le han exigido los más altos estándares de calidad.
- 8.8 Adujo que dado el interés de **AVANTEL S.A.S.** en el correcto manejo e íntegro cumplimiento del régimen de Protección de Datos personales, se sirvió celebrar una reunión con la Dirección de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones para socializar el respectivo tema.
- 8.9 Afirmó la investigada que **AVANTEL S.A.S.** ha actuado con la debida lealtad y diligencia y en virtud del principio de buena fe respecto de esta Superintendencia y de sus usuarios, en procura de establecer los hechos que no le son jurídicamente imputables.
- 8.10 Finalmente solicitó la investigada se procediera con el archivo de la presente actuación administrativa.

NOVENO: Que mediante la Resolución No. 7472 del 29 de marzo de 2019¹⁰ este Despacho procedió a incorporar las pruebas aportadas por la denunciante, las recaudadas preliminarmente por esta Dirección y las aportadas por la investigada, declaró agotada la etapa probatoria dentro de la presente investigación y corrió traslado a la sociedad investigada para que presentara alegatos de conclusión; tal y como se relacionan en el acto administrativo citado.

DÉCIMO: Que mediante escrito de fecha 15 de abril de 2019 y número de radicado 18-11160- -32¹¹ los investigados allegaron los alegatos de conclusión reafirmando lo manifestado en los escritos de descargos.

DÉCIMO PRIMERO: Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio

El artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, establece la función de vigilancia que le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de los Operadores, las Fuentes y los Usuarios de información financiera, crediticia, comercial y de servicios en cuanto se refiere a la actividad de administración de datos personales. Señala la norma estatutaria lo siguiente:

"Artículo 17. Función de vigilancia. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la función de vigilancia de los operadores, las fuentes y los usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, en cuanto se refiere a la actividad de administración de datos personales que se regula en la presente ley.

En los casos en que la fuente, usuario u operador de información sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, esta ejercerá la vigilancia e impondrá las sanciones correspondientes, de conformidad con las facultades que le son propias, según lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas pertinentes y las establecidas en la presente ley.

Para el ejercicio de la función de vigilancia a que se refiere el presente artículo, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia, según el caso, tendrán en adición a las propias las siguientes facultades:

(...)

¹⁰ Obrante a Folios 217 a 219.

¹¹ Obrante a Folios 228 a 235.

6. Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas contra los operadores, fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, con el fin de establecer si existe responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las órdenes o instrucciones impartidas por el organismo de vigilancia respectivo, **y si es del caso imponer sanciones u ordenar las medidas que resulten pertinentes.** (Negrilla por fuera del texto original)."

En tal virtud, la citada ley consagra en su artículo 18 las sanciones que le corresponde imponer a la Superintendencia de Industria y Comercio, a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, cuando vulneren normas de protección de datos personales. Así mismo, el artículo 19 de la norma en mención establece los criterios para graduar las sanciones relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones establecidas en ella.

DÉCIMO SEGUNDO: Análisis del caso

12.1 Adecuación típica

La Corte Constitucional mediante sentencia C-1011 de 2008, estableció lo siguiente en relación con el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio:

"(...) la jurisprudencia ha estimado que para que pueda predicarse el cumplimiento del contenido del principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador, deben concurrir tres elementos a saber:

- (i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas.*
- (ii) Que exista una sanción cuyo contenido material esté definido en la ley.*
- (iii) Que exista relación entre la conducta y la sanción".*

Atendiendo los parámetros señalados por la citada jurisprudencia, para el caso específico se tiene que:

- (i) El artículo 9 de la Ley 1266 de 2008 establece los deberes que les asisten a los Usuarios de para el manejo de información.

Así mismo, el artículo 15 de la misma norma dispone que la información financiera contenida en los bancos de datos únicamente puede ser consultada por los usuarios así: (i) como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza, así como para la evaluación de los riesgos derivados de una relación contractual vigente; (ii) como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas; (iii) para el adelantamiento de cualquier trámite ante autoridad pública o una persona privada, respecto de la cual dicha información de la cual dicha información resulte pertinente; y (iv) para cualquier otra finalidad, diferente de las anteriores, respecto de la cual **y en forma general o para cada caso particular se haya obtenido autorización por parte del titular de información.**

- (ii) El incumplimiento de tales requisitos dará lugar a la aplicación de las sanciones definidas específicamente en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008.
- (iii) De conformidad con los hechos alegados por el denunciante y el acervo probatorio que obra en el expediente, se puede establecer que la conducta desplegada por la investigada se concreta en la posible vulneración del numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo 15 de la misma norma.

En ese orden de ideas, corresponde a este Despacho establecer si la conducta desplegada por la investigada dará lugar o no a la imposición de una sanción para lo cual se deberán tener en cuenta los hechos narrados por el denunciante, así como las razones de hecho y de derecho aducidas por los investigados al momento de dar respuesta a la solicitud de explicaciones, los alegatos de conclusión y el conjunto de pruebas allegadas al expediente.

12.2 Valoración probatoria y conclusiones

La presente investigación administrativa está encaminada a demostrar si efectivamente el 9 de julio de 2016, la sociedad **AVANTEL S.A.S**, consultó la historia crediticia del señor [REDACTED] sin la respectiva autorización o teniendo alguna de las finalidades establecidas en el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008, lo que implica tal y como se señaló en la resolución de apertura de investigación, que la presente investigación administrativa, se rige por el régimen especial de datos personales de carácter financiero, crediticio y comercial, contemplado en la Ley 1266 de 2008.

12.2.1 Respecto del Cargo Primero- Deber que los Usuarios de la información ostentan, de guardar reserva sobre la información que les sea suministrada por los operadores de los bancos de datos, por las fuentes o los titulares de la información y utilizar la información únicamente para los fines para los que le fue entregada, en los términos de la Ley 1266 de 2008

La información contenida en bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países de los Titulares, gozan de un principio de circulación restringida, por cuanto si se permitiera un acceso libre, implicaría en principio una violación a su derecho de Habeas Data, por ello el artículo 15 de la Constitución Política debe interpretarse de manera armónica con los principios de circulación restringida y de seguridad. Así, se debe tener presente que las entidades que administran bases de datos deben igualmente garantizar que los datos de las personas únicamente sean suministrados a su legítimo Titular, razón por la cual se les han impuesto una serie de deberes encaminados a dicho fin, esto es, la restricción de la libre circulación del dato personal con las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de la información evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado.

Conforme a lo anterior es claro que al realizar una interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008 y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, la finalidad de acceso de la información por parte de los Usuarios se vincula con la naturaleza del dato y, el objetivo del banco de datos, que no es otro que el de suministrar la información que le permita a los Usuarios calcular y realizar un análisis amplio de los factores necesarios para la determinación del riesgo crediticio aun cuando dicha consulta se utilice para establecer y mantener una relación contractual, de acuerdo con lo señalado en la Sentencia C-1011 de 2008.

"Bajo ese marco, encuentra la Corte que la norma examinada se orienta a enunciar las expresiones legítimas del principio de finalidad en la fase de acceso de los usuarios a la información personal. En ese orden de ideas, las finalidades previstas en los incisos primero y segundo del artículo 15 se enmarcan dentro de un objetivo constitucionalmente legítimo, en cuanto se inscriben en el interés fundamental que subyace en la actividad de administración de datos personales de brindar a las entidades financieras un elemento de análisis, que de manera concurrente con otros, les permita medir el crédito y el nivel de riesgo de sus actuales y futuros clientes". (Subrayado fuera de texto)

"Estas alternativas de acceso al dato personal de contenido comercial y crediticio por parte de los usuarios deberán, en primer lugar, ejecutarse con sujeción a los principios de administración de datos personales y, en particular, al principio de circulación restringida. Por ende, el acceso por parte de los usuarios deberá sujetarse a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos y las disposiciones constitucionales y legales aplicables, en especial el principio de temporalidad de la información y la finalidad del banco de datos. Este último aspecto cobra una especial importancia para la interpretación de las posibilidades de acceso analizado, en la medida en que implica que las finalidades de acceso a la información para los usuarios deberán estar vinculadas con los objetivos del archivo o banco de datos. Esta finalidad, como se ha indicado en el presente fallo, es la de contar con herramientas para el cálculo del riesgo crediticio". (Subrayado fuera de texto)

Aunado a lo anterior, se tiene que el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008 señala las finalidades por las cuales los usuarios pueden acceder a la información de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 15. Acceso A La Información Por Parte De Los Usuarios. La información contenida en bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países podrá ser accedida por los usuarios únicamente con las siguientes finalidades: **Como elemento de análisis para establecer y mantener una**

"Por la cual se impone una sanción y se imparten órdenes administrativas"

VERSIÓN PÚBLICA

relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza, así como para la evaluación de los riesgos derivados de una relación contractual vigente.

Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas.

Para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona privada, respecto del cual dicha información resulte pertinente.

Para cualquier otra finalidad, diferente de las anteriores, respecto de la cual y en forma general o para cada caso particular se haya obtenido autorización por parte del titular de la información." (Negrilla fuera del texto)

No obstante, la Corte expresó el límite que tienen los usuarios para acceder a la información contemplada en la Ley 1266 de 2008, en los siguientes términos: **"para el caso de los usuarios, la posibilidad de acceder al dato estará restringida tanto por la finalidad de acopio de la información autorizada por el titular del dato, como por el cumplimiento del principio de confidencialidad previsto en el artículo 4 de la norma estatutaria"** (negrilla fuera de texto).

En ese orden de ideas, queda claro que el acceso a los datos financieros de un Titular por parte de los Usuarios, se circunscribe únicamente (i) para establecer y mantener una relación contractual, siempre y cuando, el titular de los datos lo hubiere solicitado, (ii) para evaluar los riesgos de una relación contractual vigente, pues de no ser así, se requerirá contar con el consentimiento previo, expreso e informado del sujeto concernido, o en su defecto (iii) para cualquier otra finalidad, contando con la autorización previa y expresa del titular.

Ahora bien, este Despacho procederá a revisar las pruebas obrantes en el expediente de la presente investigación:

Analizando la información suministrada por el denunciante, se tiene que el mismo afirma que no tiene ni ha tenido relación contractual con la sociedad investigada, no obstante **AVANTEL S.A.S.**, Informó que para la fecha de los hechos objeto de la presente investigación, mantenía un contrato con la compañía **"KONECTA"** para la colaboración en el desarrollo del objeto social de la sociedad, contrato en virtud del cual la sociedad **KONECTA** contaba con acceso a los perfiles de **AVANTEL S.A.S.** para el ingreso a las bases de datos de los operadores de información; motivo por el cual **AVANTEL S.A.S.** procedió a requerir a la sociedad **KONECTA** información respecto de los hechos materia de la presente actuación administrativa¹².

En este sentido la sociedad **KONECTA**, respondió al requerimiento aduciendo que por la antigüedad de la información no era posible realizar validación alguna, sin embargo, indicaron que no encontraron en sus bases de datos información del Titular¹³.

Por otro lado, la sociedad **EXPERIAN COLOMBIA S.A.**, mediante radicado No.18-11160- -10¹⁴ dio respuesta al anterior requerimiento manifestando que la sociedad **AVANTEL S.A.S** efectuó consulta de la historia de crédito del señor [REDACTED] el día 11 de diciembre de 2017, tal y como se observa a continuación:

Sobre el particular, nos permitimos informar que la sociedad Avantel S.A.S. durante el lapso indicado, efectuó una consulta de la historia de crédito del titular el día 11 de diciembre de 2017.

Vale la pena precisar que dado que la consulta se realizó hace más de 6 meses, ésta a la fecha no se visualiza en el historial crediticio del titular, de conformidad con lo previsto en el Artículo Primero, numeral I, literal D del Decreto 1727 del año 2009.

15

Por su parte, la sociedad investigada solicitó fuese aplicado el principio de *in dubio pro disciplinado* o *principio de favorabilidad*, en la medida que no existen pruebas suficientes para endilgar responsabilidad a la sociedad en relación a los hechos objeto de la presente investigación, dado que el reporte del Operador **EXPERIAN COLOMBIA S.A.** sólo indica que la consulta objeto de

¹² Obrante a Folio 150.

¹³ Obrante a Folio 150.

¹⁴ Obrante a Folios 17.

¹⁵ Imagen tomada Folio 17 del Expediente.

investigación, se realizó con el usuario de **AVANTEL S.A.S.** más no permite inferir que la comisión de la infracción sea imputable a la sociedad.

De lo anterior este Despacho ha podido dilucidar, que el argumento presentado por la sociedad investigada, al afirmar que existe duda respecto de quién fue la persona natural o jurídica que realizó la consulta, carece de toda validez, en la medida que se encuentra debidamente probado, que la sociedad **AVANTEL S.A.S.**, en calidad de Usuario de la información, accedió y consultó el historial crediticio del señor [REDACTED], tal y como lo informó el operador de información **EXPERIAN COLOMBIA S.A.**

En este sentido, no se puede dar aplicación al principio de favorabilidad, por cuanto en el plenario es evidente que la consulta se realizó con el usuario de la sociedad **AVANTEL S.A.S.**, sociedad sobre quien recae la responsabilidad de salvaguardar que la información garantice unos niveles mínimos de seguridad y en esta medida impedir el acceso o consulta no autorizada.

Ahora bien, el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008 señala que para consultar la historia de crédito los Usuarios tienen que contar con una finalidad legítima o en su defecto contar con la autorización específica otorgada por el titular. Por lo anterior, teniendo demostrada la consulta efectuada por **AVANTEL S.A.S.** se procederá a analizar si contaba con una finalidad legítima para consulta el historial del señor [REDACTED] el 11 de diciembre de 2017, o si en su defecto tiene la autorización previa y específica del Titular para realizar la consulta.

Las finalidades legítimas para consulta el historial crediticio son las siguientes: (i) Como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza, así como para la evaluación de los riesgos derivados de una relación contractual vigente; (ii) Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas; y (iii) Para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona privada, respecto del cual dicha información resulte pertinente.

Una vez analizado el material probatorio obrante en el expediente y los argumentos expuestos por la investigada encontramos que la sociedad afirma que *"se realizó la validación en las áreas internas de la compañía y no se encontraron registros o soportes que acrediten de forma siquiera sumaria que Avantel hubiese consultado la información almacenada en centrales de riesgo del señor Hamer Jonathan Bastidas"*,

Esto aunado a lo manifestado por la investigada en comunicación del 5 de marzo de 2016, respecto a si hay relación contractual vigente con el denunciante ante lo cual señaló *"se da a conocer que entre el reclamante y Avantel, no existe relación comercial, como tampoco contamos con registro de solicitud para el mes de diciembre de 2017"* (fl.13)

En consecuencia, es claro que la consulta realizada por la investigada no se enmarca en ninguna de las finalidades señaladas anteriormente.

Siguiendo con el análisis señalado, ahora se procederá a verificar si la investigada cuenta con la autorización específica del titular para haber efectuado la consulta del 11 de diciembre de 2017, ante lo cual nos encontramos que no existe la autorización previa y expresa por parte del Titular para que **AVANTEL S.A.S.** realice la consulta de su información crediticia y en esta medida, la aseveración que realiza, sobre una alianza comercial con la empresa **KONECTA** y sobre la duda que existe frente a quién efectuó la consulta, la conclusión es que la consulta que se efectuó a través del usuario de **AVANTEL S.A.S.**, y teniendo en cuenta que no demostró tener una finalidad legítima establecida en la ley para realizar la consulta del historial crediticio, debía contar con autorización previa y expresa del Titular para poder realizar la consultas ante centrales de riesgo, sin embargo **AVANTEL S.A.S.** en el presente caso no demuestra tener autorización para ello.

En conclusión, se encuentra probado que la sociedad **AVANTEL S.A.S.** consultó la historia de crédito del señor [REDACTED] identificado con cédula de ciudadanía No. [REDACTED] el día 11 de diciembre de 2017, como fue certificado por el Operador de información Experian Colombia S.A. (fl. 17). En segundo lugar, que esta sociedad realizó la indicada consulta sin contar con una finalidad legítima en los términos del artículo 15 de la Ley 1266 de 2008, pues ella no tuvo como criterio teleológico: (i) constituir un elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual y/o evaluar los riesgos de una relación contractual; (ii) desarrollar

un elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas, o (iii) para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona privada, respecto de la cual la información resulte pertinente. Ni tampoco la referida sociedad contaba con la autorización previa del Titular para acceder a su información financiera con una finalidad diferente a las señaladas previamente.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la sociedad investigada no logra probar en el expediente, que cumplió con el deber especial contemplado en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008 y en lo señalado en el artículo 15 ibídem, al no haberse demostrado tener la autorización previa y expresa o una de las finalidades establecidas en el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008, para la consulta del historial crediticio del reclamante, encuentra este Despacho que **AVANTEL S.A.S.**, vulneró el Derecho de Habeas Data del titular.

12.2.2 Respetto del cargo Segundo - Respetto de la responsabilidad del Representante Legal de AVANTEL S.A.S.

Así mismo, en este punto es oportuno traer a acotación lo conceptuado en la Resolución No.91422 del 17 de diciembre de 2018, emanada del Despacho del Superintendente Delegado Para la Protección de Datos Personales, respecto de la responsabilidad de los administradores, el cual prevé lo siguiente:

"Responsabilidad de los administradores en materia de tratamiento de datos personales.

El artículo 2 de la Constitución de la República de Colombia de 1991 señala que son fines esenciales del Estado, entre otros, "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". Nótese como la disposición constitucional reclama que se obtengan resultados positivos y concretos respecto de los derechos constitucionales como, por ejemplo, el debido tratamiento de los datos personales o la protección de datos previsto en el artículo 15 de la Carta Política.

La efectividad de los derechos humanos es un asunto de gran importancia en la sociedad a tal punto que es una exigencia de naturaleza constitucional y del más alto nivel en el ordenamiento jurídico. Por eso, el citado artículo ordena que las "autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 333 que "la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común". Dicho "bien común" se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, la protección de los derechos humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser humano sea tratado como una "persona" y no como un objeto o cosa.

En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la "libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades" y que la "empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones". Como se observa, la actividad empresarial no puede realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene cabida jurídica la afirmación según la cual "el fin justifica los medios". En efecto, no se trata de una libertad ilimitada, sino de una actividad "restringida" porque no solo debe ser respetuosa del bien común, si no que demanda el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales.

El bien común al que se refiere el precitado artículo 333 exige que, entre otras, la realización de cualquier actividad económica garantice los derechos fundamentales de las personas. Es por esto que la Constitución pone de presente que la participación en el mercado supone responsabilidades y que efectuar actividades empresariales implica cumplir con las obligaciones previstas en la ley.

Ahora bien, según el artículo 22 de la ley 222 de 1995¹⁵ la expresión administradores comprende al "representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detentan esas funciones". Cualquiera de ellos tiene la obligación legal de garantizar los derechos de los titulares de los

¹⁵ Ley 222 de 1995 "Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones"

"Por la cual se impone una sanción y se imparten órdenes administrativas"

VERSIÓN PÚBLICA

datos y de cumplir la ley 1581 de 2012 y cualquier otra norma. Es por eso que el artículo 23 de la ley en mención establece que los administradores no sólo deben "obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia de un buen nombre de negocios", sino que en el cumplimiento de sus funciones deben "velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias"¹⁷ (subrayamos)

(...)

Nótese que el artículo 24¹⁸ de la ley en comento presume la culpa del administrador "en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos". Dicha presunción de responsabilidad exige que los administradores estén en capacidad de probar que han obrado con lealtad y la diligencia de un experto, es decir, como un "buen hombre de negocios" tal y como lo señala el precitado artículo 23. Adicionalmente, no debe perderse de vista que los administradores jurídicamente responden "solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros"¹⁹

En este sentido es de suma importancia resaltar la responsabilidad jurídica y económica, que radica no sólo en las personas jurídicas, sino también en cabeza de sus administradores, de suerte que este Despacho es enfático en aclarar que los mismos deben obrar con profesionalismo y diligencia en su gestión para tratamiento de datos personales.

Por su parte la sociedad investigada, solicitó no tener en cuenta los actos administrativos expedidos dentro del marco de la actuación administrativa No. 16-336625, toda vez que (i) la Resolución No. 27542 del 24 de abril de 2018 dictada dentro de la referida actuación, no se encuentra en firme, puesto que se encuentra pendiente a resolver recurso de apelación y; (ii) los hechos que rodean la mentada actuación, giran en torno a eventos ocurridos en agosto de 2015 y enero de 2016 fecha en la cual el señor [REDACTED] no figuraba como representante legal de la sociedad.

En este sentido este Despacho aclara a la sociedad investigada, que la Resolución 27542 del 24 de abril de 2018, se encuentra en firme, a través de la Resolución No. 8348 del 5 de abril de 2019, a través de la cual confirmó la resolución que impuso una sanción a la sociedad, de suerte que **AVANTEL S.A.S.** no demostró contar con autorización previa y expresa para la consulta del historial crediticio del Titular o contando con una finalidad legítima establecida en el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008.

En la presente investigación administrativa, este Despacho encuentra que para la fecha en la que se efectuó la consulta en el historial crediticio del Titular, fue día 11 de septiembre de 2017 fecha en la cual el señor [REDACTED] ya figuraba como representante legal de la sociedad, conforme se evidencia en el certificado de existencia y representación de la sociedad, que expongo a continuación:

CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 135 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 5 DE JUNIO DE 2017,
INSCRITA EL 27 DE JUNIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02237357 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
PRESIDENTE [REDACTED] 20

¹⁷ Crf. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995.

¹⁸ El texto completo del artículo 24 de la 222 de 1995 dice lo siguiente: "Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así:

ARTICULO 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.

En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar.

Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal.

Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.

¹⁹ Crf. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995

²⁰ Obrante a Folio 185 reverso.

Por lo tanto, era su responsabilidad, dar cumplimiento de las obligaciones emanadas de la normatividad relativa a protección de datos personales.

En virtud de lo anterior, **ORDENAMOS** al Representante Legal de **AVANTEL S.A.S.**, [REDACTED] identificado con la C.E. No. [REDACTED], para que adelante las acciones necesarias con el fin de adoptar las medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con el propósito de:

- 1) Evitar realizar consultas en el historial crediticio de los Titulares, sin contar con la autorización previa y expresa para ello o en su defecto contar con una finalidad legítima contemplada en el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008.
- 2) Adoptar medidas de seguridad idóneas, tendientes a garantizar que el acceso a las consultas de los historiales crediticios de los Titulares, sea de manera controlada, lo que contempla, implementar políticas de asignación y bloqueo de claves.

DÉCIMO TERCERO: Imposición y graduación de la sanción

13.1 Facultad sancionatoria

La Ley 1266 de 2008 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio una potestad sancionatoria que se concreta en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008, estableciendo algunos criterios de graduación que se encuentran señalados en el artículo 19 ibídem, por lo tanto, atendiendo dichos criterios, este Despacho entrará a determinar cuáles deberá tener en cuenta en el caso concreto, así:

13.1.1 imposición y graduación de la sanción

Respecto a las sanciones que se imponen por la infracción a los deberes contenidos en la Ley 1266 de 2008, debe precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho administrativo sancionador, la autoridad administrativa debe ejercer su potestad sancionadora en forma razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad de la norma que fuera trasgredida, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.

Así las cosas, con el objetivo de realizar una correcta adecuación entre los hechos y la sanción aplicable, esta Dirección debe analizar en primera instancia la dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados, así como el posible beneficio económico, de suerte que luego se analicen las demás circunstancias objeto de graduación de la sanción, como lo son, la capacidad económica del investigado, la reincidencia en la comisión de la infracción, la colaboración del investigado en el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación²¹.

También se tendrá en cuenta para la dosificación de la sanción, el tamaño de la empresa, sus ingresos operacionales, patrimonio, y en general, su información financiera, de tal manera que la sanción resulte disuasoria más no confiscatoria. Finalmente, se tendrá en cuenta la conducta investigada durante el trámite de la investigación administrativa.

En el caso *sub-examine*, quedó demostrado que a pesar de las explicaciones presentadas por la investigada, no existe justificación válida para haber realizado la consulta del historial crediticio del señor [REDACTED], pues se efectuó la misma, sin mediar alguna de las finalidades previstas en la ley o en su defecto, sin contar con la autorización previa y expresa del Titular, lo que conlleva a esta Dirección a concluir que con dicha conducta vulnero el derecho fundamental de *habeas data* del Titular, el cual se encuentra expresamente protegido por la Constitución Política y enmarcado dentro de los principios de la administración de datos,

²¹ Ley 1266 de 2008. ARTÍCULO 19. CRITERIOS PARA GRADUAR LAS SANCIONES. Las sanciones por infracciones a que se refiere el artículo anterior se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables: a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley; b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión de la infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar; c) La reincidencia en la comisión de la infracción; d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio; e) La renuencia o desacato a cumplir, con las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio; f) El reconocimiento o aceptación expresas que haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.

establecidos en el artículo 4 de la Ley 1266 de 2008, que para el caso particular, **AVANTEL S.A.S.** en calidad de Usuario de información, debe enmarcar sus actuaciones de conformidad con el principio de finalidad previsto en la mentada ley.

En consecuencia, no hay lugar a dudas para esta Dirección acerca de la dimensión del daño que efectivamente se materializó en el caso en cuestión al efectuar consultas del historial crediticio de los titulares, sin un consentimiento previo e informado o mediando una de las finalidades establecidas en el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008, por cuanto es evidente que los intereses jurídicos tutelados por la Ley Estatutaria de Hábeas Data fueron vulnerados.

Como quiera que es claro que la sociedad investigada vulneró el derecho de *habeas data* del titular, respecto a la vulneración al deber contemplado en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 15 ibídem, esta Superintendencia impondrá por esta conducta como sanción, la suma de CIENTO TREINTA Y TRES (133) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

13.1.2 Reincidencia en la comisión de la infracción

Será tenido en cuenta el criterio contenido en el literal c) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008 en la medida en que con anterioridad la sociedad investigada ha sido sancionada por la misma conducta violatoria de la ley, esto es, que se ha generado reincidencia en el cumplimiento del deber contar con la autorización o una finalidad, para realizar la consulta ante las centrales de riesgo del titular, razón por la cual este Despacho impondrá una sanción equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes adicionales, a la sanción inicialmente impuesta, quedando en un total de DOSCIENTOS TRECE (213) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En efecto, enseguida se destaca la siguiente sanción:

Expediente 16-033625

En el caso del señor [REDACTED] identificado con cédula de ciudadanía No. [REDACTED], la sociedad **AVANTEL S.A.S.**, le consultó su información crediticia sin que hubiese autorizado a adelantar dicha consulta, sin embargo, la sociedad investigada, no logró demostrar la finalidad para la cual efectuó esta consulta o en su defecto la autorización para realizarla, incumpliendo el deber dispuesto en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo 15 de la misma disposición, configurándose de esta manera la vulneración del Derecho de Habeas Data del titular.

Este Despacho sancionó, a la citada sociedad mediante la Resolución No. 27542 del 24 de abril de 2018, por el incumplimiento del deber contemplado en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo 15 ibídem.

13.1.3 Otros criterios de graduación

Por último se aclara que los criterios de graduación de la sanción señalados en los literales b), d) y e) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008 no serán tenidos en cuenta debido a que (i) dentro de la investigación realizada no se encontró que la investigada hubiera obtenido beneficio económico alguno por la comisión de la infracción, (ii) no hubo resistencia u obstrucción a la acción investigativa de la Superintendencia y, (iii) no hubo renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones del Despacho.

El criterio de atenuación señalado en el literal f) del artículo citado no se aplica toda vez que la investigada no reconoció o aceptó expresamente la comisión de las infracciones.

DÉCIMO CUARTO: En este orden de ideas, de acuerdo a los argumentos de hecho y de derecho expuestos por la investigada en su escrito de descargos, una vez analizadas las pruebas obrantes en el expediente, y en virtud del numeral 1) del artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, mediante el cual se le asigna, entre otras funciones, esta Superintendencia el "(...)Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones de la presente ley(...)", esta Instancia procederá a impartir las siguientes instrucciones al Representante Legal de **AVANTEL S.A.S.**, [REDACTED] identificado con la C.E. No. [REDACTED]

- 1) Evitar realizar consultas en el historial crediticio de los Titulares, sin contar con la autorización previa y expresa para ello o en su defecto contar con una finalidad legítima contemplada en el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008.
- 2) Adoptar medidas de seguridad idóneas, tendientes a garantizar que el acceso a las consultas de los historiales crediticios de los Titulares, sea de manera controlada, lo que contempla, implementar políticas de asignación y bloqueo de claves.

De lo anteriormente ordenado el Representante Legal de **AVANTEL S.A.S.**, [REDACTED] identificado con la C.E. No. [REDACTED] deberá acreditar a este Despacho las acciones correctivas adoptadas, de la forma y dentro del término señalado en la parte resolutive del presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad **AVANTEL S.A.S.** identificada con Nit. 830.016.046-1, de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/cte. (\$176.388.708.00), equivalente a DOSCIENTOS TRECE (213) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el incumplimiento del deber establecido en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo 15 ibidem.

PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta No. 050000249, a nombre de Dirección del Tesoro Nacional – Fondos Comunes, Código Rentístico No. 350300, Nit. 899999090-2. El pago deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR al Representante Legal de **AVANTEL S.A.S.**, [REDACTED] identificado con la C.E. No. [REDACTED], para que se adopten las medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con el propósito de:

- 1) Evitar realizar consultas en el historial crediticio de los Titulares, sin contar con la autorización previa y expresa para ello o en su defecto contar con una finalidad legítima contemplada en el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008.
- 2) Adoptar medidas de seguridad idóneas, tendientes a garantizar que el acceso a las consultas de los historiales crediticios de los Titulares, sea de manera controlada, lo que contempla, implementar políticas de asignación y bloqueo de claves.

Según lo expuesto en su parte motiva. Para lo cual deberá dar cumplimiento dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor [REDACTED] identificado con la C.E. No. [REDACTED], deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado en el presente artículo ante esta Superintendencia dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la expiración del plazo previsto para su acatamiento. Para ello deberá remitir a esta entidad una certificación de cumplimiento de las instrucciones impartidas por mandato de este acto administrativo. Dicha certificación debe ser emitida por una persona jurídica nacional o extranjera, la cual debe ser un tercero imparcial y especializado en los temas que involucra la implementación de cada orden.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en el presente acto administrativo, hará al señor [REDACTED] A identificado con la C.E. No. [REDACTED] en calidad de

"Por la cual se impone una sanción y se imparten órdenes administrativas"

VERSIÓN PÚBLICA

Representante Legal de la sociedad **AVANTEL S.A.S.**, acreedor de las sanciones previstas en la ley.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la **AVANTEL S.A.S.** identificada con Nit. 830.016.046-1 y al señor [REDACTED] identificado con C.E. No. [REDACTED] en su calidad de representante legal, entregándole copia de la misma e informándole que contra ella procede recurso de reposición ante el Director de Investigación de Protección de Datos personales y el de apelación ante el Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente resolución al [REDACTED] identificado con la C.C. No [REDACTED]

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C.,

28 JUN 2019

El Director de Investigación de Protección de Datos Personales,

CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ

Proyectó: YLAC
Revisó: AMVJ
Aprobó: CESM

NOTIFICACIÓN:**Investigada:**

Entidad: AVANTEL S.A.S.

Identificación: Nit. 830.016.046-1

Representante Legal: [REDACTED]

Identificación: [REDACTED]

Dirección: Carrera 11 No. 93 – 92

Ciudad: Bogotá, D.C.

Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@avantel.com.co**Investigado:**

Señor: [REDACTED]

Identificación: [REDACTED]

Dirección: [REDACTED]

Ciudad: [REDACTED]

COMUNICACIÓN:**Reclamante:**

Señor: [REDACTED]

Identificación: [REDACTED]

Dirección: [REDACTED]

Ciudad: [REDACTED]

Correo Electrónico: [REDACTED]